

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500520190029301
Proceso:	Ordinario
Demandante:	HUMBERTO ALVAREZ BARRERA
Demandado:	COLPENSIONES, PROTECCION S.A., AFP PORVENIR S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	24/02/2023
Decisión:	CONFIRMA, ADICIONA, REVOCA PARCIALMENTE Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	HUMBERTO ALVAREZ BARRERA
DEMANDADAS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
LITIS CONOSRTE NECESARIO POR PASIVA	PORVENIR S.A.
ORIGEN	Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-005-2019-00293-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 del Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por HUMBERTO ALVAREZ BARRERA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.¹

En atención al memorial aportado vía electrónica el 08 de septiembre de 2021² y a la certificación anexa, se reconoce personería para representar los intereses de Protección S.A., a la abogada María Carolina Peñuela Pérez, identificada con la CC 43.971.629 y portadora de la TP 132.091 del C. S de la J., quien funge como representante judicial de la entidad.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda³

El señor Humberto Álvarez Barrera formula demanda contra Colpensiones, Protección S.A. y Porvenir S.A., pretendiendo se declare **i)** la ineficacia y nulidad del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual –RAIS-, y consecuentemente **ii)** se ordene la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media –RPM- administrado por Colpensiones; y se **iii)** declare que te tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de forma retroactiva desde que cumplió 62 años, junto con los incrementos

¹ Fue integrada como Litis consorte necesaria por pasiva. 01PrimeraInstancia, archivo 01EXPEDIENTE FISICO.pdf. págs. 86/88

² 02SegundaInstancia, 07alegatosProteccion0520190239.pdf y 08CertificadoProteccion0520190293.pdf

³ 01PrimeraInstancia, archivo 01EXPEDIENTE FISICO.pdf. págs. 4/8 y reforma a la demanda, pág. 302

anuales de ley y mesadas adicionales; **iv)** se condene al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación; y **v)** Costas del proceso.

El señor Humberto Álvarez Barrera fundamentó sus pretensiones en que se afilió al extinto Instituto de Seguros Sociales –ISS- el 30 de enero de 1979. Suscribió traslado de régimen hacia Colmena S.A. en el año 1999, como consecuencia de manifestaciones en cuanto a valores de las mesadas pensionales que no se harían realidad, engañando al demandante con cálculos financieros exagerados e irreales, sin advertirle las consecuencias que conllevaría suscribir dicho traslado, la diferencia en la mesada pensional que obtendría en cada uno de los regímenes. Al momento de presentación de la demanda tiene 62 años y más de 1800 semanas cotizadas. El 30 de abril de 2019 solicitó a las demandadas su traslado de régimen, petición que solo fue resuelta por Colpensiones el 19 de marzo de 2019, negando el trámite de la pensión de vejez.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones⁴

Por carecer de fundamentación fáctica y legal, y no haber incumplido la entidad con ninguna obligación legal, por cuanto la afiliación y posterior traslado se presume realizado de forma correcta, radicando en cabeza del actor la carga de probar los supuestos de hecho y derecho en que se sustentan sus pretensiones, quien además se encuentra inmerso dentro de la prohibición legal para trasladarse de régimen, estando a cargo de Protección S.A. pagar eventualmente la pensión de vejez. Excepcionó: inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de traslado de régimen por no existir vicio o nulidad alguno en afiliación, devolución de cuotas de administración, imposibilidad de pagar pensión de vejez, inexistencia en el pago de retroactivo pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, intereses moratorios y/o indexación de la condena a cargo de la AFP demandada, devolución de aportes debidamente indexados, compensación, descuentos del retroactivo por salud, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, la que denominó “genérica”.

Al contestar la reforma de la demanda adicionó las de⁵: inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, e intereses moratorios y/o indexación de la condena a cargo de las AFP demandadas.

ii) Protección S. A⁶

Afirma que las actuaciones de la entidad han estado revestidas de buena fe y legalidad, por lo cual todas las personas que están afiliadas a dicha AFP lo han hecho de forma libre y voluntaria, como el demandante quien suscribió el formulario de afiliación manifestando su voluntad de pertenecer al RAIS libre de vicios del consentimiento; documento que

⁴ 01PrimeraInstancia, 01EXPEDIENTE FISICO pdf. pág. 96/112

⁵ 01PrimeraInstancia, 07. BZ 2019_7865839 HUMBERTO ALVAREZ HERRERA CC 3348552 contestacion reforma.pdf

⁶ 01PrimeraInstancia, archivo 01EXPEDIENTE FISICO pdf. Pág 142/157

además cumple con todas las formalidades exigidas por la ley, se brindó previamente asesoría completa y comprensible sobre el acto. Resalta que solo con la promulgación de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2555 de 2010 se estableció expresamente el deber de asesoría en torno a los beneficios e inconvenientes de los regímenes pensionales, de manera que no es factible imponer obligaciones a la AFP con base a normas inexistentes para el momento en que se suscribió el traslado. El demandante nunca hizo uso de su facultad de retracto ni optó por retornar en el periodo de gracia, quien además le asisten deberes como consumidor financiero. Indica que la acción se encuentra prescrita por haber transcurrido más de 3 años de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1750 del Código Civil. Excepcionó: Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, y la que llamó “innominada o genérica”.

iii) Porvenir S.A.⁷

El acto de afiliación fue libre de presiones o engaños, como se desprende del formulario de afiliación en el que se observa la declaración escrita del actor en que se indica que se suscribe de forma consciente de las implicaciones y efectos del traslado, documento que se presume auténtico, y que constituye la ratificación del acto de traslado; se le garantizó el derecho de retracto y no uso de su facultad. Se brindó la respectiva asesoría en la cual se informó de manera clara, precisa y veraz, las características del RAIS, por lo que no existieron vicios del consentimiento y no se acreditó que el demandante era incapaz absoluto; no procede ineficacia del artículo 271 de la ley 100 de 1993, al no acreditarse actos atentatorios contra el derecho de afiliación. Finalmente indica que el demandante se encuentra inmerso en la restricción del literal 3) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que este no era beneficiario del régimen de transición. Excepcionó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la que denominó “genérica”.

Sentencia de primera instancia⁸

El 10 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, declaró ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, administrado por la AFP Protección S.A., y que su afiliación al RPM no ha tenido solución de continuidad. Condenó a Porvenir S. A. a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, traslade con destino a Colpensiones el 100% de los aportes efectuados, incluidos los frutos y rendimientos financieros causados, asumiendo con cargo a su patrimonio las comisiones de administración, las pólizas provisionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y Fondo de solidaridad pensional, deducidos desde el 1° de agosto de 1999 hasta que se haga efectivo el traslado de régimen; precisando que al Protección S.A. haber trasladado a la AFP Colpatria S.A. y Horizontes S.A. –hoy Porvenir S.A.–, lo relativo a los aportes y rendimientos financieros, dispuso que dentro del mismo término, traslade

⁷ 01PrimeraInstancia, 01EXPEDIENTE FISICO pdf. Pág 270/288 y 12. CONT REFORMA PORVENIR 5 2020 00293 HUMBERTO ÁLVAREZ BARRERA.pdf

⁸ 01PrimeraInstancia, archivos 15 y 16 INEFICACIA DE TRASLADO + PENSION DE VEJEZ.mp4

a Colpensiones con cargo a su propio patrimonio, lo correspondiente a los conceptos de comisiones de administración, pólizas provisionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y Fondo de Solidaridad pensional. Condenó a Colpensiones a recibir tales aportes, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS como semanas que deberán reflejarse en su historia laboral.

Declaró que al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme la Ley 797 de 2003, condenando a Colpensiones a reconocer y pagar la prestación causada el 20 de agosto de 2018, con derecho al disfrute a partir del 1° de abril de 2019, correspondiente a una mesada de \$4'061.454 para el año 2019, por concepto de 13 mesadas al año, advirtiendo que sobre ella operan los reajustes de ley y los descuentos en salud, condenando por retroactivo pensional la suma de \$103'987.127 liquidado entre el 1° de abril de 2019 y el 28 de febrero de 2021, sobre el cual dispuso la indexación y el descuento por aportes en salud. Absolvió a Colpensiones de las restantes pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas a Protección S.A. y a Porvenir S.A. en la suma de \$908.526.00 en un 50% para cada una. Adicionalmente, las administradoras deberán pagar el 3% del valor del retroactivo pensional calculado.

Para fundamentar lo decidido, el juez de primera instancia acudió al precedente jurisprudencial vigente en la materia y concluyó que no hubo una información suficiente, clara, veraz y oportuna que le hubiese permitido un discernimiento preciso y claro al demandante, para este poderse persuadir de que efectivamente podría tener una desmejora en el monto de su pensión, que es lo que lo tiene en este proceso. No se allegó prueba que permita llegar a la conclusión de que al actor se le hizo una diferenciación entre cual sería el monto de su pensión en el RAIS y en el RPM, por lo tanto, no pudo dimensionar los efectos que le sobrevendrían del traslado que estaba efectuando, y al no ser suficientemente informado, su traslado es ineficaz.

Consideró acreditados los requisitos para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en virtud de lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, con el cumplimiento de los 62 años el 20 de agosto de 2018, momento para el cual tenía más de 1.700 semanas; dispuso el disfrute de la prestación a partir del 1° de abril de 2019 al haberse configurado el retiro tácito del sistema. Para liquidar la prestación tuvo en cuenta el IBL de los últimos 10 años anteriores calculado en \$5'474.034 para una mesada pensional a reconocer en el año 2019 de \$4'061.454, ordenando la indexación del retroactivo pensional, y negando el reconocimiento y pago de los intereses moratorios al estar Colpensiones imposibilitado para reconocer la prestación.

Recursos de apelación

i) Demandante: inconforme parcialmente con lo decidido, solicita la revisión de la sentencia en los siguientes aspectos:

- a)** Respecto al IBL, pide que se verifique la indexación de cada uno de los salarios reportados dentro la historia laboral, con el IBL de los últimos 10 años, teniendo en cuenta que Porvenir S.A. en el curso del proceso en una liquidación provisional liquidó un IBL mayor, casi de \$5'600.000.

- b) Afirma debió tenerse en cuenta una tasa porcentual mayor a la aplicada por el Juez A Quo, quien tomó 1.749 semanas para liquidar la prestación, cuando de la historia laboral acreditada por Porvenir S.A. se acreditan más de 1.800 semanas.
- c) Solicita se revoque la absolución al pago de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señalando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que estos son un derecho de los pensionados a que el sistema les resarza el no pago oportuno de las mesadas pensionales; adicionalmente señala que existió una falla en el sistema, no pudiendo eximirse totalmente a Colpensiones, ya que esta entidad también tenía la obligación de informarle al afiliado las condiciones en que se daría el traslado.

ii) Colpensiones: recurre totalmente la sentencia, afirmando que se obtuvo confesión del actor, en cuanto a que se trasladó libre y voluntariamente al RAIS, le hablaron de pensión anticipada, y aunque no recuerda si le hablaron de rentabilidad ni heredabilidad, lo cierto es que el hecho que no recuerde lo que se le dijo al momento del traslado, no implica el incumplimiento de la carga por parte de los fondos del RAIS; adicionalmente argumentan que al actor tener 64 años, no es posible admitirlo nuevamente en el RPM. Solicita que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez se disponga como una obligación de hacer, y se espere a que se normalice la afiliación del demandante, siendo Colpensiones quien liquide la prestación. Por último, pide se revoque la indexación, ya que previo al pago de las prestaciones económicas que hace la entidad, la misma indexa dichos valores, por lo que se incurriría en una doble condena.

iii) Protección S.A: Recurre parcialmente la decisión en cuanto a la orden de devolución de la comisión de administración y lo descontado por primas de seguros previsionales, por ser un descuento autorizado por ley y que opera en ambos regímenes; está dispuesta como contraprestación de la buena administración del recurso del demandante, que se evidencia en los excelentes rendimientos financieros. Refiere que la devolución de la comisión de administración deriva en un enriquecimiento sin justa causa en favor de Colpensiones, ya que estos no financian la pensión de vejez de la parte demandante, máxime que ya se están trasladando los rendimientos fruto de la buena gestión de administración, teniendo derecho a conservar la misma como restitución mutua en su favor, ello como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil, en que se advierten los efectos de la nulidad tienen cosa juzgada, y da derecho a las partes de ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo, de manera que si producto de la ineficacia es que las cosas vuelvan a su estado anterior, implicaría que el acto nunca existió y por ello no existió administración de los recursos, no generándose los rendimientos ni cobro de administración, pero acorde a las restituciones mutuas, no se puede desconocer que gracias a la administración del bien se produjeron frutos y mejoras.

Resalta que el actor ya no se encuentra afiliado a Protección, por lo que se trasladaron los aportes y lo correspondiente a su cuenta de ahorro individual, y cita que según concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, al presentarse un traslado de régimen, se debe trasladar el dinero de la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el porcentaje de fondo de garantía de pensión mínima, respetando los aportes realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora; también considera que no debe trasladarse la prima del seguro previsional, por haber cumplido la aseguradora con la cobertura, habiéndole girado la

prima mes a mes, siendo además un tercero de buena fe que no tuvo injerencia en el acto de traslado.

Argumenta que sobre el cobro del 3% destinado para los referidos conceptos operó la prescripción, por ser descuentos periódicos y no financiar directamente la pensión.

Finalmente, solicita revisar la condena que se le impuso a reconocer por costas procesales el 50% del 3% del retroactivo pensional, pues con ello el demandante estaría recibiendo dos veces el dinero.

iv) Porvenir S.A: Se aparta del fallo de primera instancia íntegramente, argumentando que, si lo pretendido es obtener declaratoria de ineficacia prevista en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, esta norma establece que cualquier persona natural o jurídica que hubiere realizado actos atentatorios contra el libre derecho de elección, se hace acreedor a una multa que impone el ministerio del trabajo, y si bien señala que quedará sin efecto la afiliación, no se aproxima a lo dispuesto por el artículo 1740 y siguientes del Código Civil, por lo que en aplicación del principio de inescindibilidad de las normas, no puede acudir de forma indiscriminada a diferentes normas para resolver un conflicto.

Reitera que el formulario de afiliación se presume auténtico, conteniendo expresamente las declaraciones exigidas por el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, en torno a que la decisión fue libre, espontánea, sin presiones, lo cual fue ratificado por el actor en su interrogatorio de parte, quien no desconoce haberlo suscrito.

Afirma que la entidad cumplió con la carga procesal impuesta del cumplimiento del deber de asesoría al demandante, pese a la inversión de la carga de la prueba, al haber aportado los documentos que estaban en su poder para demostrar la elección libre e informada de la vinculación del demandante, lo cual se acreditó con los traslados horizontales entre fondos, la conducta de permanecer en el régimen de ahorro individual y permitir los descuentos con destino a los fondos privados, sin que sea admisible la imposición de cargas distintas de las establecidas en las leyes existentes al momento de la afiliación del demandante, lo que constituiría una violación al debido proceso y la confianza legítima del fondo, al existir capacidad del demandante, objeto y causa lícita.

En caso de que se considere que el negocio jurídico no tiene validez, no debe ordenarse la devolución de dineros distintos a los dispuestos en el artículo 113 literal b) de la Ley 100 de 1993, esto es saldos de la cuenta de ahorro individual y rendimientos, dado que ningún otro valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, y ordenar valores adicionales, configuraría un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, además, reintegrar los gastos de administración sería como ordenarle a una compañía de seguros que si no se presenta el siniestro, debe devolver al valor de la póliza.

Finalmente, resalta que el actor tuvo vinculaciones con Colpatria y Horizonte, las cuales fueron absueltas por Porvenir S.A., pero de aquellas no recibió conceptos como gastos de administración, de ahí que no haya lugar a condenar a Porvenir S.A. a devolver dineros que nunca recibió. Y sobre los gastos de administración, seguros previsionales y primas de seguros, aduce no hacen parte integrante de la pensión ni la financian, razón por la cual opera la prescripción según el artículo 488 del CST y 151 del CPTSS.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Concedido traslado para alegar de conclusión en esta sede, ambas partes lo recorrieron de forma oportuna, excepto la parte demandante quien lo hizo por fuera del término⁹ otorgado para ello, por lo cual no se tendrán en cuenta.

i) Porvenir S.A¹⁰: acudió a los argumentos expuestos al contestar la demanda y al formular el recurso de alzada, relacionados a la no acreditación de vicios en el consentimiento, la aplicación del principio de inescindibilidad de las normas, que orienta a que deba acudir a la sanción prevista por el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, más no a normas civiles que no aplican al caso concreto, el cumplimiento de la carga probatoria en torno a la asesoría previo traslado, resaltando que la conducta de la activa al permanecer en el RAIS y permitir el descuento de aportes, da cuenta de *la verificación de voluntad del afiliado*, y de un actuar negligente por su parte al no interesarse por aspectos relevantes para él que ahora echa de menos, y que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes existente al momento del traslado, constituye violación al debido proceso y confianza legítima, al ser el actor afiliado jurídicamente capaz y contener el acto objeto y causa lícita.

Pide que en caso, de considerar que el acto no tuvo validez, solo se ordene devolver el saldo de la cuenta individual y rendimientos, más no el valor de comisión de administración y seguros previsionales, como fue abordado por la Superintendencia Financiera en el Concepto N°20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020, por cuanto dichos conceptos no financian la pensión de vejez, ya que constituiría un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones y que además están sujetos al fenómeno prescriptivo de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

ii) Colpensiones¹¹ reiteró lo manifestado en su recurso de apelación, solicitando que de confirmarse la declaratoria de ineficacia, se ordene la devolución de aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido en razón a la afiliación, pues de no recibirlos la entidad sufriría un detrimento patrimonial por ser quien deba asumir el reconocimiento prestacional. Finalmente, firma que es necesaria la desafiliación del sistema para iniciar a disfrutar de la prestación, y solicita que la obligación de hacer de Colpensiones, esté sujeta a la normalización de afiliación en el SIAFP y la devolución de aportes a Colpensiones, con la respectiva entrega del archivo y detalle de aportes realizados durante su permanencia en el régimen de ahorro individual, y solo a partir de ese momento comience a correr la respectiva indexación.

iii) Protección¹² itera su inconformidad en cuanto a la orden de devolver la comisión de administración y prima de seguro previsional, advirtiendo que confirmar la condena en tal sentido con cargo su propio patrimonio, implica una condena de perjuicios contra el patrimonio de Protección, la cual tendría que revisarse a la luz de la responsabilidad civil con sus propios elementos, y en el presente asunto no fue objeto de prueba ni se

⁹ El término para formular alegatos vencía el 7 de septiembre de 2021, y la parte demandante allegó memorial recorriendo traslado el 24 de noviembre de 2022. Ver 02SegundaInstancia; 18AlegatosDemandante0520190293.pdf

¹⁰ 02SegundaInstancia, 04AlegatosPorvenir.pdf.

¹¹ 02SegundaInstancia, 06AlegatosColpensionespdf.

¹² 02SegundaInstancia 05AlegatosProteccionpdf

acreditaron. Insistió además en que sobre tales conceptos opera el fenómeno prescriptivo ya que no financian la prestación de vejez.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones, y el subsiguiente reconocimiento de la pensión de vejez.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Hechos relevantes probados documentalmente

Humberto Álvarez Barrera nació el 20 de agosto de 1956¹³. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 30 de enero de 1979¹⁴. El 31 de octubre de 1996 suscribió traslado con destino a Protección S.A.¹⁵, posteriormente el 23 de junio de 1999¹⁶ se trasladó hacia Colpatria Pensiones y Cesantías, encontrándose actualmente afiliado a Porvenir S.A. desde el 1° de agosto de 1999¹⁷. El 28 de mayo de 2009, contando con 52 años de edad el demandante suscribió formulario de afiliación al extinto ISS¹⁸, trámite del que no obra respuesta en el plenario. Para el 8 de marzo de 2019 el actor contaba con 1.826 semanas de cotización, de las cuales 616 lo fueron ante Colpensiones, y 131 ante otras administradoras del RAIS¹⁹. El día 30 de abril de 2019, solicitó a Colpensiones y a Porvenir S.A. la declaratoria de ineficacia de afiliación²⁰, tales peticiones fueron negadas, el 7 y 9 de mayo de 2019 respectivamente, argumentando que el traslado se ejerció en derecho a la libre elección de régimen²¹. El 19 de marzo de 2019, Colpensiones negó el

¹³ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 10. No se aportó registro civil de nacimiento, pero si copia de la cédula de ciudadanía que señala tal fecha, la cual no fue discutida por la pasiva.

¹⁴ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 20; 50 y 02. 2019-00293 EXPEDIENTE ADTIVO COLPENSIONES, archivo denominado GRP-SCH-HL-66554443332211_1522-20190614094623.pdf

¹⁵ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 172

¹⁶ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 178

¹⁷ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 292

¹⁸ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 26

¹⁹ 02SegundaInstancia; 16RespuestaRequerimientoPorvenir0520190293.pdf

²⁰ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 32/34

²¹ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 42/44 y 72/75

reconocimiento de pensión de vejez al demandante por no estar afiliado a dicha administradora²²

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte del demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335²³ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1²⁴, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994²⁵; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas²⁶ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²⁷.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan*

²² 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 36

²³ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

²⁴ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

²⁵ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

²⁶ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

²⁷ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen". No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, sólo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir

requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por las pasivas en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a las Administradoras, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó a la afiliada, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, que las AFP le informaron que el ISS se iba a terminar y tenían dificultad para cumplir con las pensiones.

Con independencia de que la afiliación se diera con antelación o en momento posterior a la regulación de deberes del consumidor financiero, estas entidades deben, en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

En cuanto al reclamo que se hace sobre la carga de la prueba, con este precedente, se desvirtúa además la aplicación de la actora del principio de auto responsabilidad de los hechos afirmados en la demanda, pues en este caso, en virtud de la carga dinámica de la prueba ésta se radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sub-lite, mediante la prueba documental se evidencia que Humberto Álvarez Barrera nació el 20 de agosto de 1956²⁸, por lo que, al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajador dependiente del sector privado, contaba con 36

²⁸ 01PrimeraInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 10

años de edad y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones²⁹, por tanto, no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 31 de octubre de 1996 suscribió traslado con destino a Protección S.A.³⁰, el cual se acusa de ineficaz. El 23 de junio de 1999³¹ se trasladó hacia Colpatria Pensiones y Cesantías, encontrándose actualmente afiliado a Porvenir S.A. desde el 1° de agosto de 1999 en virtud de la cesión por fusión entre Colpatria y Horizonte, ésta última que a su vez fue fusionada por Porvenir S.A.³². El 28 de mayo de 2009, contando con 52 años de edad el demandante suscribió formulario de afiliación al extinto ISS³³, trámite del que no obra respuesta en el plenario. El 30 de abril de 2019, solicitó a Colpensiones y a Porvenir S.A. la declaratoria de ineficacia de afiliación³⁴, peticiones que fueron negadas por ambas AFP, el 7 y 9 de mayo de 2019 respectivamente, argumentando que el traslado se ejerció en derecho a la libre elección de régimen³⁵.

Adicionalmente, fue recaudado interrogatorio al demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su vinculación al RAIS, manifestó que la afiliación a Colmena se dio porque en varias oportunidades fueron a visitarlo a su lugar de trabajo, y le manifestaron que el ISS se iba a acabar y que no estaba garantizada su pensión a futuro, pero que tendría mayores garantías en el fondo privado, más no recuerda que le hayan advertido qué sucedería con los aportes del ISS, ni lo relacionado a la cuenta de ahorro individual o los rendimientos de esta, ni sobre si el saldo de la cuenta de ahorro individual era heredable. Le indicaron al demandante que el bono pensional era un tipo de pensión anticipada si lo quería recibir. Sobre su posterior migración a otras AFP del RAIS advirtió que fue decisión personal, por cambiar de administradora, no obstante, nunca recibió asesoría, pues solo se dirigió a las oficinas a solicitar el formulario de afiliación, los cuales suscribió.

Protección S.A. no aportó elemento de convicción sobre la asesoría que dice haber brindado al demandante, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa al entonces potencial afiliado.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar al hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen u otro, y en general, las consecuencias de tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad

²⁹ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 20; 50 y 02. 2019-00293 EXPEDIENTE ADTIVO COLPENSIONES, archivo denominado GRP-SCH-HL-66554443332211_1522-20190614094623.pdf

³⁰ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 172

³¹ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 178

³² 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 292

³³ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 26

³⁴ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 32/34

³⁵ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 42/44 y 72/75

e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación a Porvenir S.A. pues la ineficacia del traslado de régimen afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad.

No hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación, sobre el cual Protección S.A., adujo que, estando suscrito por el demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que, esta sala no acoja el supuesto de que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199-2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**³⁶, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993³⁷ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como respuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL-4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271³⁸ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar al accionante el ejercicio del derecho a la libre selección de régimen pensional, y dado que ha manifestado a lo largo del proceso, desde el escrito de demanda, que su voluntad es pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES, se asumirá que así lo ha estado desde su afiliación inicial al ISS, y a declarar que ha permanecido afiliado, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente, se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos que administraron las AFP

³⁶ Por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral.

³⁷ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

³⁸ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud^{<1>} en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

demandadas del RAIS durante el tiempo de afiliación del hoy demandante en cada una de ellas, deben trasladarse a la administradora del RPM que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso las AFP, parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información, garanticen que el patrimonio del inducido a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, y adicionarán** las órdenes impartidas desde la primera instancia a **PORVENIR -AFP a la que actualmente se encuentra afiliado el actor-**, en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que el hoy demandante figuró como afiliado al RAIS.

Se precisa, para resolver los recursos de apelación, que Porvenir S.A. y Protección S.A, también deben trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ellas descontadas durante el periodo de afiliación del hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni si el dinero del afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular del hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por las AFP para aseverar que cumplieron con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarlas de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración del accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de las AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor del hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Adicionalmente, Porvenir S.A deberá responder por estos conceptos por el tiempo en que el demandante permaneció afiliado a Colpatria S.A. y Horizonte S.A., en razón de la fusión por absorción de éstas AFP con Porvenir S.A.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido

en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral³⁹ contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación del hoy demandante, en ella **se deben trasladar debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**, aspecto en el cual, se **adicionará** la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Por lo expuesto, no se acogerá lo apelado por los fondos del RAIS, respecto a acoger el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA⁴⁰, ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008⁴¹, toda vez que dicha norma fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multifiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en

³⁹ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Porvenir S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

⁴⁰ “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

⁴¹ **Decreto 3395 de 2008 ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

materia laboral y de seguridad social que los gastos administración y prima de seguro previsional deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

Finalmente se indica, **ha de revocarse parcialmente** lo ordenado devolver por el Juez A Quo en torno a lo ordenado por concepto de fondo de solidaridad pensional, ello por cuando dicho concepto tiene una destinación específica dentro del SGSSP y manejo en cuenta especial por encargo fiduciario, el cual no está sujeto a los vaivenes de los traslados de regímenes o entre AFP, ello porque si bien no fue objeto de apelación, tal decisión configura una vía de hecho con la que no se debe cohonestar, y además extralimita sus facultades extrapetita, y desacata el principio de legalidad consagrada en el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, según el cual los jueces en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley.

Esta decisión de la Sala no afecta el principio de no reforma en peor para el apelante, en razón a que no se está desconociendo derecho alguno a Colpensiones, ni se está afectando con ella el régimen de prima media, por las razones ya expuestas.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con las AFP accionadas, sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A y de PROTECCIÓN S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el Régimen de Prima Media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación.

Resuelto el primer problema jurídico, se aborda ahora el derecho pensional pretendido en consulta en favor de Colpensiones, así como lo apelado por la activa.

c) Causación y disfrute de la pensión de vejez

Para determinar si el hoy demandante consolidó o no el derecho pensional deprecado, se consideran los siguientes elementos fácticos y jurídicos: Humberto Álvarez Barrera nació el 20 de agosto de 1956⁴², por lo que al 1° de abril de 1994 contaba con 36 años de edad, teniendo además para esa fecha menos de 15 años de cotizaciones o servicio⁴³, razón por la cual no es beneficiario del régimen de transición. Así las cosas, la prestación de vejez del hoy demandante debe ser reconocida con base en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, como acertadamente dispuso el Aquo.

⁴² 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 10. No se aportó registro civil de nacimiento, pero si copia de la cédula de ciudadanía que señala tal fecha, la cual no fue discutida por la pasiva.

⁴³ 01PrimerInstancia, EXPEDIENTE FISICO.pdf pág. 20; 50 y 02. 2019-00293 EXPEDIENTE ADTIVO COLPENSIONES, archivo denominado GRP-SCH-HL-66554443332211_1522-20190614094623.pdf Tenía cotizadas 534.15 semanas al 1 de abril de 1994.

Respecto a la causación de la prestación, cabe precisar que el actor cumplió los 62 años de edad el 20 de agosto del año 2018, fecha para la cual ya acreditaba las 1300 semanas exigidas⁴⁴. En consecuencia, debe entenderse que el actor, causó su derecho a la pensión el día que cumplió con ambos requisitos al arribar a la edad de 62 años y arribar a la densidad de semanas mínima exigida, como correctamente lo dispuso el juez A Quo.

Respecto a lo alegado por Colpensiones sobre la obligatoriedad de la desafiliación del sistema para el disfrute de la prestación, ha de indicarse que el Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, está regulado en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, dado lo normado en el artículo 31 de la citada ley. Tales normas señalan: *“Pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”, “...las pensiones del Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a disfrutar de la pensión...”*.

Así, visto que el demandante cesó en sus cotizaciones y tiene reunido el requisito de edad, es dable el reconocimiento del disfrute de la prestación, no obstante, la fecha de disfrute será **modificada** en virtud del grado jurisdiccional de consulta en que se revisa la sentencia en favor de Colpensiones, en vista que el A Quo dispuso el reconocimiento a partir del 1° de abril de 2019, no obstante, acorde la prueba decretada de oficio en esta sede, Porvenir S.A. allegó historia laboral actualizada en que se observan cotizaciones efectuadas hasta el 25 de octubre de 2020 a través del empleador Agrícola Bahamas S.A.S., en tal sentido, se entiende que el disfrute de la prestación deberá ordenarse desde el día siguiente, es decir, el 26 de octubre de 2020.

No se acogerá lo apelado en torno a que el retroactivo pensional no se genere desde que se acredite su retiro del sistema sino desde que se active la afiliación del actor en Colpensiones, toda vez que el disfrute de la pensión de vejez, y por lo tanto la generación de un retroactivo pensional, opera desde el momento en que el usuario se desafilia efectivamente del sistema, no resultando procedente imponer requisitos adicionales o requerimientos administrativos arbitrarios, como lo es que además figure como afiliado en determinado fondo de pensiones.

En atención a los aspectos de apelación de la parte actora, así como la revisión que se hace en consulta en favor de Colpensiones, procedió el Despacho a realizar el cálculo del Ingreso Base de Liquidación de toda la vida laboral del demandante, éste arrojó un valor de \$5'013.100 pesos; por su parte, **el IBL de los últimos 10 años dio como resultado un valor de \$5'039.983 pesos**, como se desprende de los cálculos anexos a la presente providencia, resultado inferior al realizado por el Juez A Quo, quien contabilizó el IBL de los últimos 10 años a 2019 en \$5'474.034, diferencia que puede radicar en que dicho funcionario tuvo en cuenta para ello, hasta el 31 de marzo de 2019, mientras que este Despacho contabilizó semanas adicionales que se acreditaron cotizadas por el demandante hasta octubre de 2020, sin que sea posible establecer alguna razón adicional de la diferencia, en tanto la liquidación anexa a la sentencia de instancia solo corresponde a la de toda la vida laboral.

⁴⁴ 02SegundaInstancia; 16RespuestaRequerimientoPorvenir0520190293.pdf

Por lo expuesto, se tomó el IBL de los últimos 10 años calculado por esta Sala de Decisión, toda vez que le resulta más beneficioso al demandante, valor al que le fue aplicado una tasa de reemplazo superior a la aplicada por el A Quo equivalente al 77.63%⁴⁵, aspecto en que se acogerá lo apelado por el apoderado judicial del demandante, dado que acreditó más de 1.831 semanas cotizadas en toda su vida laboral. Aplicada entonces dicha tasa porcentual, se obtuvo una mesada pensional de **\$3'912.499** pesos para el año 2020.

Esta mesada deberá ser pagada por Colpensiones sobre 13 mesadas anuales, por haberse causado esta prestación con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005⁴⁶, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley y los descuentos en salud a que haya lugar.

Así las cosas, adeuda Colpensiones a la demandante por concepto de **retroactivo pensional, causado entre el 26 de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2023**, la suma de **Ciento Veintiocho Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos (\$128'156.440)**, como se observa a continuación:

Año	IPC	Mesada	# mesadas	Total retroactivo
2020	1,61%	\$ 3.912.499	3 y 5 días	\$ 12.389.580
2021	5,62%	\$ 3.975.490	13	\$ 51.681.373
2022	13,12%	\$ 4.198.913	13	\$ 54.585.866
2023		\$ 4.749.810	2	\$ 9.499.620
TOTAL				\$ 128.156.440

La mesada continuará pagándose para el año 2023 en **\$4'749.810**, sin perjuicio de los aumentos anuales previstos en el art.14 de la ley 100 de 1993.

Se **confirma** la autorización emitida desde la primera instancia, a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional causado y el que en adelante se cause, lo correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y en lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia.

d) Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Para resolver lo apelado por la parte demandante en torno a este concepto, ha de indicarse que los intereses moratorios no se causaron a cargo de Colpensiones, por cuanto la orden emitida a cargo de Colpensiones respecto a reconocer y pagar la pensión de vejez se derivó como consecuencia de la declaratoria de ineficacia emitida en el marco de este proceso judicial, no estando facultada la entidad a reconocer dicha prestación en momento anterior a este proceso de quien no figuraba como su afiliado; no siendo posible tampoco

⁴⁵ La demandante acreditó 2.080,14 semanas cotizadas en toda su vida laboral, y si bien la tasa de reemplazo es de 86,72% de conformidad con el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, la tasa porcentual no puede superar el 80%, así reza “A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”

⁴⁶ Inciso 8º art. 1 Acto Legislativo 01 de 2005 “A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo”

emitir orden abstracta en tal sentido por una tardanza que no se ha configurado. Al respecto ver sentencias SL 1055 de 2022, SL 1688 de 2019, SL1421de 2019 y SL 4128 de 2021.

Por tanto, se **confirmará** la decisión de instancia en cuanto a se dispuso la indexación de la suma concedida por concepto de retroactivo, en virtud que no puede obligarse al deudor a recibir lo adeudado en un menor valor de lo que realmente se le debe, ha de conjurarse el impacto que elementos como la inflación ocasionan, depreciando el valor de la moneda. De ahí que se disponga la indexación, siguiendo la siguiente fórmula, avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Para resolver **lo alegado por Porvenir y Protección S.A.** en su apelación, en cuanto a la aplicación del fenómeno extintivo sobre el 3% destinado a cuotas de administración y demás conceptos distintos a cotizaciones y rendimientos que se dispuso trasladar, debe indicarse que sobre ellos, la prescripción tampoco tiene vocación de prosperidad, pues tal y como la acción judicial tendiente a declarar la ineficacia del traslado de régimen es imprescriptible para quien todavía no se encontraba gozando de pensión de vejez, igual suerte corren los derechos que surgen como consecuencia de tal declaratoria, como aquel destinado a obtener el derecho pensional o los conceptos que se ordenó devolver al RPM.

Finalmente, frente a la inconformidad de Protección S.A. en su apelación, en cuanto al monto de las agencias en derecho, el Despacho se abstiene de pronunciarse al no ser el momento procesal oportuno.

IV. COSTAS

Finalmente, costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, Porvenir S.A y Protección S.A por haber resultado vencidas en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para 2023 (1 SMLMV) distribuido en partes iguales a cargo de cada una, y en favor del demandante.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el 10 de marzo de 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por HUMBERTO ALVAREZ BARRERA contra COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A Y PORVENIR S.A.; **adicionándola**, en el sentido en que esta última AFP:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como afiliada a dicho régimen.

Además, PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A trasladarán a Colpensiones los valores descontados al actor por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en el mismo lapso que permaneció como afiliada ante ellas.

Adicionalmente, PORVENIR S.A deberá responder por estos conceptos por el tiempo en que la demandante permaneció afiliada a COLPATRIA y HORIZONTE S.A., en razón de la fusión por absorción de estas AFP con PORVENIR S.A.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral del demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral TERCERO de la sentencia referida, en cuanto se ordenó a las AFPS del RAIS demandadas a trasladar lo destinado al fondo de solidaridad pensional, por lo ya motivado.

TERCERO: MODIFICAR el numeral **QUINTO** de la referida providencia, en el sentido de que Colpensiones deberá reconocer y pagar pensión de vejez al demandante, a partir del 26 de octubre de 2020, sobre 13 mesadas anuales. La mesada pensional, liquidada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 según se explicó en la parte motiva de esta providencia, asciende para el año 2020 al valor de **\$3'912.499** y para el año 2022 actualizada con base al IPC a **\$4'749.810**, sin perjuicio de los aumentos de ley.

Colpensiones deberá pagar al demandante, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 26 de octubre del 2020 y el 28 de febrero de 2023, la suma de **Ciento**

Veintiocho Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos (\$128'156.440), los cuales deberán ser indexados.

Se autoriza a la demandada a descontar del retroactivo de mesadas pensionales el valor de los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES, PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A. Agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente en 2023 (1 SMLMV) distribuido en partes iguales cargo de cada una y en favor del demandante.

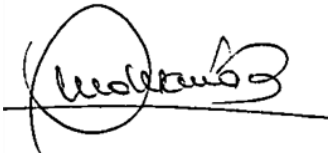
Notifíquese lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
En ausencia justificada